

En la imagen es algo así como una mancha, una sombra o un conjunto de puntos que aparecen de un momento a otro en el mapa. En la realidad, se trata de miles de familias que, entre 2019 y el año pasado, llegaron a vivir en campamentos.

Luego que esta semana Techo-Chile y Fundación Vivienda (FV) dieran a conocer un nuevo catastro 2020-2021 en torno a esta problemática — que detectó 969 campamentos habitados por más de 81 mil familias, un 73,52% más que las que habitaban estos asentamientos según el conteo que entre 2018 y 2019 hizo el Ministerio de Vivienda y Urbanismo—, datos a los que accedió “El Mercurio”, muestran tres casos paradigmáticos de comunas que vivieron los mayores incrementos absolutos en el número de personas que habitan en ellos.

**El primero es el de San Antonio, en la Región de Valparaíso, que pasó de tener 69 familias en cinco campamentos en 2019, a 5.932 en 15 asentamientos, en el nuevo catastro. Le siguen Alto Hospicio y Lampa, que sumaban 3.519 y 637 familias y, en los datos más recientes, llegaban a 7.587 y 3.709.**

“Estas comunas representan, con una claridad sumamente prístina, la idea de que los campamentos son en verdad la punta de un iceberg. Cuando ves estas imágenes satelitales, lo que estamos viendo es una mancha que aumenta, pero lo que nos parece más interesante es reconocer que lo que no se ve es justamente el campamento oculto, invisible, de donde venían estas familias”, explica Sebastián Bowen, director ejecutivo de Techo-Chile y FV, haciendo referencia a las condiciones de hacinamiento y precariedad habitacional que suelen marcar la antesala del traslado a un campamento.

El alcalde de la comuna costera, Omar Vera, recuerda que se venía trabajando en esta materia hace varios años, junto al SERVIU y el Ministerio de Desarrollo Social. Sin embargo, las cosas se complicaron poco después del estallido. “A partir de diciembre del 2019 se inicia un proceso de toma de terreno de particulares de forma desmedida y ahora hay una situación de tres mil a cuatro mil lotes tomados”, apunta.

Sobre cómo se llegó a este punto, plantea que hay gente en su comuna que “se cansó de esperar una solución habitacional del SERVIU y tomó esta acción de toma”, pero advierte que también hay otras situaciones, como quienes buscarían generar negocios de compraventa “y también gente que tiene prontuario policial, que va hacia lugares alejados y con menos control”.

## Un problema que ya se desbordó

Otro caso llamativo es el de Temuco. En la capital de La Araucanía, los datos disponibles a 2019 mostraban que no había campamentos. Según el sondeo que se presentó esta semana, ya hay 34 que albergan a 1.040 familias. El alcalde Miguel Becker señala que se trata de tomas de sectores públicos y privados “para obtener subsidios y eso no es fácil de resolver”. Si bien afirma que habían logrado superar este desafío, “en 2019 tuvimos un rebrote”.

Acerca de las causas, cree necesario mirar más de cerca la composición de los asentamientos. “No sé si es solo por la situación económica, se ha hecho un esfuerzo por lograr que muchas familias tengan sus viviendas definitivas; pero hay también quienes teniendo una casa, las venden y se van a tomas para comercializar; entonces hay que analizar muy bien quién es quién”, acota el jefe comunal.

En Temuco, Bowen afirma que hace un tiempo ya “se estaba incubando una problemática, muy vinculada a los niveles de vulnerabilidad. Para nadie es sorpresa que la Región de La Araucanía es una de las que refleja los mayores índices en Chile”.

El sociólogo anticipa, de hecho, que esta es una de las líneas a seguir explorando: la relación existente entre las condiciones de cada zona y su situación de campamentos. Por ejemplo, trazando los vínculos con otros tipos de exclusión habitacional y precariedad. Y también, con la entrega de soluciones habitacionales. Todo esto, dice, forma una gran “olla a presión” que si bien venía dando señales en los catastros de las últimas décadas, que ya reflejaban un aumento, terminó por colapsar tras el estallido social.

El alcalde de Alto Hospicio, Patricio Ferreira, sostiene que el escenario solo empeoró con la contingencia: “Se acrecentó en la pandemia, con la pérdida de trabajos y con familias jóvenes que buscan independencia, pero no tienen trabajos para arrendar siquiera”. Para enfrentar este panorama tan complejo, propone analizar fórmulas distintas, como la entrega de terrenos donde las familias puedan construir sus propias viviendas. “No es posible que habiendo recursos, no haya una política pública clara que permita construir y entregar soluciones habitacionales a tanta gente que lo necesita”, dice.

“El estallido habitacional ya explotó, debemos hoy día hablar con urgencia y medidas totalmente excepcionales. Debiera ser una acción concertada del país, como si fuera una emergencia nacional”, asegura Bowen.



**La imagen satelital** corresponde a febrero de 2019 en San Antonio. Los bordes azules marcan las zonas acotadas donde había campamentos.



**Este era el escenario en abril del año pasado**, tras los impactos del estallido social y el inicio de la crisis sanitaria en el país.